

Deuda y Crisis Económica-Social Hacia una Nueva Propuesta Alternativa en América Latina*

Fausto Burgueño Lomelí•

Hoy es aceptado por todos el carácter profundo y prolongado de la crisis estructural que vive el sistema capitalista mundial. Desde fines de los años sesenta, la economía capitalista se caracteriza por una profundización de sus desequilibrios productivos, feroz competencia de los capitales, una redistribución de la producción y el consumo y la competencia por los mercados. Junto al carácter estructural de la crisis y su comportamiento de largo plazo, está también presente su carácter cíclico que identifica periodos de recesión cada vez más largos y de periodos de recuperación más cortos. En su conjunto se inscribe un largo periodo de estancamiento y desempleo junto a la tendencia de imponer un Nuevo Orden Económico Internacional.

En la década de los sesenta se inició un crecimiento lento en los países desarrollados y se buscó la posibilidad de un crecimiento continuo en los países subdesarrollados en un intento de superar el

• Este trabajo se presentó en el evento que con motivo de los 500 años del "Encuentro de los dos Mundos", se realizó en Madrid, España, en mayo de 1988, bajo el auspicio de la Federación Latinoamericana de Periodistas y la Unión de Periodistas de España. El autor agradece la colaboración en la revisión y análisis del tema e información a los colegas Raúl Huerta, Patricia Olave, Carmen del Valle, Ana Ceceña, José Gasca y de forma muy especial a Genoveva Roldán.
• Director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

lento crecimiento anterior, así como los efectos de la crisis cíclica de 1974-1975. La década de los ochenta se inició con una nueva crisis cíclica que en los países subdesarrollados se acompañó de la llamada crisis de la deuda externa. El crecimiento lento se profundizó en todos los países capitalistas. En 1986, los resultados fueron preocupantes debido a que la recuperación posterior de 1980-1982, frenó de nuevo al conjunto del sistema que en 1984 había tenido un crecimiento elevado del 5 por ciento, bajó al 3 en 1985 y al 2.6 por ciento en 1986. En Estados Unidos se frenó aún más drásticamente. De un crecimiento del 6.8 por ciento en 1984, cayó a un 2.5 en 1986.

Así, a partir de los años setenta se manifiesta un crecimiento lento del capitalismo de carácter cíclico acentuado en 1974-1975, 1980-1982 y 1986-1987. Este movimiento se observa tanto en el comportamiento del producto nacional como en la producción industrial y el desempleo. La tasa de ganancia empresarial también disminuye como tendencia a largo plazo, se profundizan el desarrollo desigual y los conflictos por la hegemonía. Sobre todo, Alemania y Japón, van desplazando a Estados Unidos en varias ramas productivas, en el comercio y el sistema financiero. Estados Unidos se convierte en el primer deudor mundial y Japón en el mayor acreedor del mundo. Unido a lo anterior, el sistema capitalista muestra una creciente sobreproducción de mercancías al mismo tiempo que el comercio mundial se contrae y sólo alcanza el nivel que tenía en 1981, provocando fuertes caídas en los precios de mercancías y materias primas, se expresa además, una fuerte sobreacumulación de capitales y limitadas zonas nuevas de inversión, el capital financiero es dominante y se desliga cada vez más de la producción para orientarse hacia las bolsas de valores. Se establece el reino de la especulación y se agravan los desequilibrios en el sistema, particularmente en Estados Unidos con los fuertes déficit comerciales y del presupuesto de la economía norteamericana. Las limitaciones de las políticas económicas y de la propia estructura del sistema quedó de manifiesto con el profundo *crac* de las bolsas de valores que expresa el inicio de una nueva etapa de la crisis financiera y del sistema mismo que se prolonga en un nuevo ciclo para 1988-1989.

En América Latina, la profundidad y efectos de la crisis adquieren un tono verdaderamente dramático que vulnera gravemente su economía y deteriora a la sociedad y a las naciones. La región vive hoy un decenio perdido y una profundización de su desequilibrio, desigualdad y mayor dependencia estructural. El panorama que hoy

vive América Latina se sintetiza con sólo recordar factores fundamentales como lo siguiente: Decenio de crecimiento negativo, mayor deuda e inflación crónica, desestabilización y desequilibrio productivo, contracción del mercado interno, especulación, fuga de capitales, devaluación, privatización de la economía, desempleo, pérdida salarial, concentración del ingreso, caída de los precios de materias primas y pérdida relativa de la soberanía nacional.

En la región latinoamericana, por sexto año consecutivo, se mantiene una débil evolución de la economía. Con una población actual de 416 millones de habitantes el PIB creció a sólo 2.6 por ciento en 1985, 3.8 en 1986 y de 2.5 en 1987. La tasa de inflación continúa alta, siendo en 1985 de 275 por ciento, disminuye en 1986 al 88 y aumenta en 1987 al 185 por ciento. El desempleo actual es de 60 millones de personas.

El problema de la deuda, externa e interna, representa uno de los obstáculos más graves que incide en el comportamiento de la economía: en 1970 el total de la deuda externa era de 20 796 millones de dólares; en 1980, 160 297. En 1986 de 382 000 para situarse en 1987 en 409 000 millones de dólares. Tan sólo por concepto de servicio de la deuda, América Latina ha transferido al exterior durante el periodo de 1982-1987 un monto neto total de 145 000 millones de dólares.

Si consideramos sólo el pago de intereses, en 1985 se cubrieron 37 000, en 1986 32 000 millones de dólares y 15 700 millones en 1987. Por otra parte, se calcula que por fuga de capitales han salido de la región durante el periodo 1982-1987, la suma de 160 000 millones de dólares.

Por otra parte, el coeficiente de pago de intereses respecto al total de exportaciones que en 1979 era de 17.6 por ciento, en 1985 alcanzó el 35 y en 1987 el 31. El coeficiente del total de la deuda respecto al total de exportaciones fue en 1985 del 342 por ciento, en 1986 del 402 y en 1987 del 387. Al mismo tiempo se manifestó una pérdida en los precios de intercambio que en 1985 disminuyó un 5 por ciento y en 1986 un 9 por ciento. El valor de las exportaciones también disminuye en un 6 por ciento en 1985 y de 15 en 1986. Mientras tanto, disminuye también la participación de la región en el comercio mundial pasando del 5.7 por ciento en 1960 al 4.3 en 1987.

Ante esta situación de grave deterioro de la economía y la sociedad latinoamericanas es necesario establecer nuevas políticas y criterios de acción diferentes a las que hoy han utilizado los actuales gobiernos latinoamericanos empeñados en aplicar políticas de estabilización y

ajuste que han demostrado su fracaso para resolver la crisis y sus principales efectos. Más aún, pareciera que se conduce a nuestras economías, no hacia la solución de sus problemas históricos y estructurales, sino hacia un proceso de readecuación ante las necesidades de reestructuración de la economía mundial que impone un nuevo orden económico internacional que sujeta y subordina a los países del llamado Tercer Mundo a los requerimientos de los países poderosos. Vivimos hoy una fase de transición hacia una nueva etapa del capitalismo que impone ante su reestructuración productiva, la competencia de capitales, la revolución científico-técnica y el predominio por los mercados, nuevas formas de dominación y dependencia e integración con el Norte.

Las políticas de ajuste aplicadas en América Latina, buscan e instrumentan diversas medidas para cambiar la estructura económica y social de la región que sólo han logrado lesionar gravemente a la región, sea a través de medidas llamadas de *choque* o de aquéllas más conservadoras y neoliberales aplicadas bajo el signo del Fondo Monetario Internacional. Ambas no han resuelto los graves problemas y obstáculos históricos de nuestros países, y por supuesto, tampoco han modificado las causas y efectos de la crisis actual. Más aún, a través de estas políticas se agravan sus aspectos fundamentales; recesión, inflación, desempleo, deuda, especulación, devaluación, fuga de capitales y desarticulación del aparato productivo. El resultado de las políticas de ajuste ha profundizado la complejidad de los problemas económicos, sociales y políticos de la región y pone en peligro la independencia y soberanía nacional. Se avanzó, en un proceso que puede ser irreversible, hacia nuevas formas de neocolonialismo y subordinación que impiden el libre desarrollo de las fuerzas productivas y la utilización de sus recursos y riqueza que permita el acceso y disfrute del bienestar de la sociedad.

Hasta hoy, es lamentable e irresponsable que quienes gobiernan en la región apelen y declaren su apoyo a pretendidas "libres fuerzas del mercado", en un mundo cada vez más proteccionista y monopólico. Que promueven el libre cambio y políticas de contracción de los mercados internos y anteponen una casi indiscriminada apertura al exterior permitiendo transferencias netas de recursos, privatizan la economía y debilitan a los Estados nacionales.

A esta situación, es indispensable anteponer una política y estrategia ante la crisis que analice y proponga alternativas y opciones que permitan iniciar un tránsito diferente que privilegie un nuevo pro-

yecto nacional y regional fincado en el fortalecimiento del mercado interno, el empleo, la distribución del ingreso y la soberanía e independencia nacional. Un nuevo proyecto nacional que con base en una nueva estrategia de desarrollo rompa con los obstáculos y modifique los factores que impiden el crecimiento y el desarrollo de los pueblos.

Los países de América Latina y del Tercer Mundo deben unirse y formular un proyecto destinado a superar la crisis e iniciar su tránsito al desarrollo que movilice las grandes potencialidades de las regiones; sobre todo su fuerza de trabajo, la capacidad creativa, la tecnología y el conocimiento, sus recursos naturales y su experiencia histórica, social y cultural. Es necesario examinar y debatir opciones y estrategias posibles que logren el desarrollo y puedan eliminar la desigualdad, la pobreza, el hambre, que promuevan el bienestar social y utilicen el avance de la ciencia y la técnica en favor de los pueblos y la nación latinoamericana. Es tiempo de formular una estrategia global de desarrollo que privilegie el espacio latinoamericano, que crezca hacia adentro y se fortalezca en lo económico, lo social y lo político. Que planifique su crecimiento, generación y uso del excedente económico y sobre esta base asigne a las exportaciones su verdadero significado y magnitud con el objeto de obtener lo que realmente no podemos producir.

Una verdadera y nueva estrategia de desarrollo requiere por ello articular e integrar racionalmente la agricultura, la industria y los servicios buscando la satisfacción de las necesidades fundamentales de la sociedad y movilizarla en torno a programas que acentúen lo nacional y popular.

América Latina vive de frente una crisis de carácter estructural, profunda y prolongada cuya naturaleza define también su gran desafío en el umbral de un nuevo siglo y un nuevo milenio. De cara a su futuro, nuestro compromiso es modificar su actual fisonomía, cambiar en lo económico, político y social.

Mientras tanto... La crisis se mantiene

Los países de América Latina y el Caribe atraviesan por una crisis de carácter estructural que en términos de su complejidad, profundidad y prolongación, es la más grave cuando menos de los últimos cien años. Su gestación y principales tendencias están presentes hace más de

diez años y fueron conformando elementos y características que bajo diversos factores y grados de intensidad provocaron mayor desequilibrio estructural en la producción, la distribución y el consumo y se convirtieron en situación crónica, la inflación, el desempleo, la deuda, la contracción de la economía, el desequilibrio comercial y financiero y la caída del nivel de vida de amplios sectores sociales. Se profundizó el carácter estructural de la dependencia en todos los órdenes y pone en mayor evidencia los nuevos procesos de integración y subordinación de la economía de la región ante los cambios, que reales y como tendencia, imponen las economías capitalistas desarrolladas en su nuevo intento, con elementos viejos y nuevos, para imponer y garantizar un Nuevo Orden Económico que abra una posible etapa de reordenamiento capitalista que exige su reestructuración productiva, cambios sustanciales en el comercio, sistema monetario y financiero, procesos de trabajo y nuevos productos, patrones de consumo, estructura de clases y relaciones económicas internacionales. En esta etapa, los procesos tecnológicos constituyen la punta de nuevos mecanismos de acumulación de capital que podrían imponer los nuevos flujos de capital, comportamiento y dirección. Es la nueva forma de concentración y centralización del capital que ante sus límites y contradicciones internas busca salida a la crisis sobre la base de establecer un nuevo nivel tecnológico y de desarrollo de las fuerzas productivas que de lograrlo, modificará una serie de relaciones de producción que hoy apenas vislumbramos, como la punta del *Iceberg*, en los avances en la robótica, biotecnología, microelectrónica, informática, genética, energía, exploración espacial y armamentos. La investigación científica y técnica para el desarrollo adquiere una nueva dimensión que se encamina, amplía y fortalece en la dirección de nuevas formas de producción y a lo que podríamos denominar atrevidamente *La nueva Economía*.

América Latina ante el viejo y nuevo desafío: ¿cuál es el papel que deben jugar nuestros países?

¿Cómo responder a las nuevas tendencias y cuáles opciones instrumentar?

América Latina, para referirnos sólo a esta región, ha transitado por un largo proceso histórico en el cual se gestan las raíces del atraso y el

subdesarrollo, la dependencia y la subordinación. Historia del saqueo y hurto, durante siglos, de nuestros mejores recursos, explican formas de "acumulación originaria" que parece permanente y conforman lo que conocemos como capitalismo dependiente o periférico. En su historia está la explicación más profunda del presente. Las preguntas encuentran su respuesta y nos indican que la mirada hacia el futuro no debe ser la reproducción ampliada de las condiciones de dependencia y subdesarrollo. El futuro de América Latina exige construir el propio destino y establecer bases firmes hacia su desarrollo construyendo la nueva historia fincada en la independencia y la soberanía nacional. El punto de partida, que debiera ser indiscutible, es reconocer que no se puede transitar con lo mismo ni hacia más de lo mismo.

Desde la perspectiva de 1988, y considerando los principales indicadores económicos y sociales, América Latina vive cuando menos un *decenio perdido*. Las políticas de ajuste y administración de la crisis han profundizado los ya graves desequilibrios de la región y no pocos gobiernos reconocen incluso este hecho cuando menos en el discurso. La reunión de los ocho en Acapulco, Guerrero, realizada el 29 de noviembre de 1987 declaró su propósito de contribuir a la "definición de un proyecto de desarrollo de América Latina y el Caribe [...] para la paz, la seguridad, la democracia y el bienestar social. Legítimas aspiraciones de progreso de nuestros pueblos".

Si comparamos la segunda mitad de la década de los ochenta, con otros periodos recientes, se revela la gravedad de la situación económica y su evolución.

En 1970-1974 la región tuvo un crecimiento promedio superior al 7 por ciento. Entre 1976 y 1980 aún mantuvo una tasa del 5.7, pero de 1981 a 1986 ésta cayó al 0.8 anual. En 1987 se agravó y fue más aguda la crisis económica. El producto interno bruto aumentó en sólo un 2.6 por ciento y el producto por habitante se incrementó en apenas el 0.5, es decir, según reconoce la CEPAL, 5.5 por ciento más bajo que en 1980. A precios corrientes las exportaciones crecieron un 32 por ciento en 1980, pero luego, entre 1981-1986, en -10 por ciento en promedio siendo determinante la caída de los precios de los productos básicos como el azúcar, estaño, cobre, algodón, café, petróleo, aluminio, hortalizas, entre otros. La relación de intercambio mantiene tasa negativa promedio y la región pierde cerca de 9 000 millones de dólares anuales durante 1983-1987. El poder de compra de las exportaciones que había crecido en 1980, desciende en -0.4 por ciento en el periodo 1981-1986.

Los desequilibrios en la balanza de pagos y, sobre todo, el aumento del déficit de la cuenta corriente sobrepasó en 1986 los 14 000 millones de dólares, que en 1982 alcanzó un nivel sin precedentes, 41 000 millones de dólares. Si bien, en 1987, se reduce su déficit a 9 000 millones, pero aún supera ampliamente a los registrados en 1983-1985. Por otra parte, el superávit de comercio de bienes que en 1984 alcanzó un máximo histórico de 39 500 millones de dólares, se redujo en 1985-1986 a 19 000 millones y en 1987 subió a 23 000 millones. El crecimiento más rápido del valor de las exportaciones (13 por ciento) que el de las importaciones (10 por ciento) en 1987 y el alza en los términos de intercambio aún cuando mantiene el deterioro acumulado durante el decenio, mejoró el poder de compra de las exportaciones en algunos países como México, Venezuela y Brasil, en tanto se deterioró aún más en Argentina, Ecuador, Bolivia y otros. La evolución relativamente favorable del sector externo tiene como contraparte en 1987 y lo que va de 1988, una grave contracción económica interna, alta inflación, desempleo, devaluación de las monedas y deterioro social. Como ya se mencionó, la tasa de inflación en 1987 fue de 185 por ciento y el desempleo de 60 millones de personas.

Por otra parte, las políticas de ajuste adoptadas por los gobiernos para enfrentar la crisis, privilegiando el pago del servicio de la deuda a costa del crecimiento económico de la región y de su bienestar social, la reducción del gasto público, debilitamiento del Estado Nacional, privatización de la economía, exportación neta de recursos, contracción de las importaciones, políticas, recesivas tanto salariales como de orden fiscal y monetario, han constituido elementos agravantes de la propia crisis que sacrifican el nivel de vida de la población.

El carácter estructural de la crisis y sus implicaciones políticas y sociales y ante las políticas hasta hoy adoptadas para resolverla que han demostrado su incapacidad para enfrentarla y no han dado soluciones de corto y mediano plazo, obliga a discutir y profundizar tanto el cuestionamiento de lo que hoy se ha realizado e instrumentado como a la búsqueda de nuevas y diferentes opciones tanto en la formación de medidas de corto plazo como de vías alternativas para lograr una estrategia de desarrollo que permita y garantice un crecimiento dinámico con distribución del ingreso; fortalecimiento interno y soberanía económica y nacional que promueva y amplíe mejores condiciones de vida y de bienestar social.

México no es la excepción... Y la crisis no toca fondo

La economía mexicana en su crisis estructural enfrenta graves desequilibrios internos y externos: contracción económica, inflación, desempleo, deuda, devaluaciones, concentración del ingreso, deterioro salarial, tales son algunos de los aspectos que hoy la definen. Se agrega a lo anterior el proceso creciente de privatización, apertura al exterior sin modificación de la estructura productiva, fuga de capitales, especulación financiera en el marco de una crisis financiera, estructura desigual, transnacionalización y preeminencia del sector servicios.

En 1982, con la devaluación del 17 de febrero termina la ilusión petrolera y se modifica el panorama nacional. En 1981 el servicio de la deuda externa llegó al 78 por ciento de los ingresos de divisas y se vuelven frecuentes las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y su contenido da base a la introducción de la política de ajuste, versión modificada de la política de estabilización de los años sesenta. Entre las medidas destacan: la contención crediticia, liberalización del comercio exterior, contención salarial, reducción del gasto público y disminución del sector paraestatal. En 1982, el Producto Interno Bruto cae en un 0.5 por ciento, disminuye sobre todo la producción industrial, la acumulación de capital, se reduce, así como las importaciones, se contrae la inversión que se ubica por debajo de su nivel de 1980, se duplica el desempleo y el tipo de cambio, finaliza el año de 1982 con una devaluación acumulada de 130 por ciento y la deuda externa asciende a 88 mil millones de dólares.

Es a partir de 1983, cuando se inicia la segunda fase del Programa de Ajuste con la firma de otros dos convenios de intención y se publica el Plan Nacional de Desarrollo, cuyas líneas centrales de estrategia son: liberalización casi total del comercio exterior, contención del gasto público y recortes del mismo, mantenimiento del pago del servicio de la deuda externa, liberación de precios internos, contención del salario real, subvaluación del tipo de cambio y reducción del sector paraestatal.

El saldo en la década de los ochenta es de una paralización del crecimiento económico y el PIB tiene de 1981 a 1987 año por año, el siguiente comportamiento: 7.9 por ciento en 1981, -0.5, -5.3, 3.7, 2.8 -3.7 y de 1 por ciento para 1987.

El costo social de la crisis se refleja en caídas del ingreso per cápita, desempleo del 16 por ciento y tasas de inflación que para 1982 eran

de casi 100 por ciento, en 1986 de 105 por ciento y en 1987 de 160 por ciento.

La deuda externa total, pasó de 74 900 millones de dólares en 1981 a 93 800 en 1983 y 105 000 millones en 1987. Considerando el periodo de 1981-1986 se han pagado por servicio de la deuda cerca de 100 000 millones de dólares y, tan sólo por intereses, 48 600 millones de dólares. La relación intereses-exportaciones fue en 1981 del 29 por ciento; en 1982, 47.2; 1984, 39; 1985, 36 y 1987 del 28 por ciento. La relación deuda total-exportaciones fue de 259 por ciento en 1981, 335 en 1982, 345 en 1983, 457 en 1986 y de 377 en 1987.

Tan sólo la deuda pública externa a diciembre de 1987, ascendió a 81 500 millones de dólares y habiéndose pagado por intereses entre 1983-1987, 34 500 millones de dólares. El saldo de la deuda interna a diciembre de 1987, era de 65.5 billones de pesos. La deuda pública total, es decir, tanto externa como interna, de más de 175 billones de pesos que representa el 95.6 por ciento del PIB esperado para 1988.

Evolución de la economía mexicana, 1985-1987

Ante el comportamiento cíclico de la economía mexicana, la caída del PIB en 1982 y 1983, su recuperación en 1984 y de nuevo la disminución en 1985 que se agrava con la profundización de la disminución a tasa negativa del PIB en 4 por ciento en 1986 y de sólo 1 por ciento en 1987. Se reconoce la compleja situación de la economía y se expresa por parte del gobierno la necesidad de abatir la inflación, proteger el empleo y la planta productiva y recuperar el crecimiento. Durante 1985, se logra mantener un crecimiento del producto interno bruto del 2.8 por ciento inferior al previsto de un 3.9 por ciento y en general las metas previstas en relación con la inflación y el empleo no se pudieron cumplir.

Desde 1985 se insistió en la importancia de abatir la inflación con un sostenimiento de la recuperación económica que al mismo tiempo aumentara los niveles de bienestar y lograra un ajuste estructural en las finanzas. Lo anterior no fue posible como tampoco lo fue el mantener un crecimiento anual, igual o superior al de 1984. La producción manufacturera después de un crecimiento del 6 por ciento durante el primer cuatrimestre del año, se redujo en un 4.5 por ciento, y lo mismo sucedió con la producción de bienes de capital,

con la inversión, la producción de bienes de consumo no duradero y la industria de la construcción.

La inflación fue superior al 80 por ciento cuando estaba previsto por el gobierno en alrededor de un 35 por ciento. La deuda, tanto externa como interna se convirtió en un problema cada vez más agudo y complejo, el déficit fiscal se mantuvo en 9.6 por ciento, la balanza comercial y de cuenta corriente experimentaron reducciones significativas en su superávit, se agudizaron los desequilibrios monetarios y financieros y en general las relaciones económicas con el exterior. La leve recuperación de 1984, se convierte, de nuevo, a fines de 1985 en una tendencia a la recesión que se acentúa en 1986, cerrando el año con tasa negativa del PIB del 4 por ciento. Las previsiones del gobierno para 1986, planteadas en el documento anual de *Criterios Generales de Política Económica*, se derrumbó ante la realidad y los hechos de 1986. En las previsiones del documento señalado, se estimó para ese año un crecimiento del PIB del 1 al -1 por ciento, una inflación entre el 45 y 50 por ciento, sostener un superávit en cuenta corriente y aumentar el empleo. Ninguna de ellas se logró; el PIB, de 4 por ciento, la inflación de 105 por ciento y el desempleo de aproximadamente 15 por ciento.

El 23 de junio de 1986, se anunció el *Programa de Aliento y Crecimiento*, PAC. El nuevo programa supone la continuidad con el PIRE y el Plan Nacional de Desarrollo y establece un nuevo tipo de negociación de la deuda y busca un crecimiento promedio del 3 al 4 por ciento del PIB para 1987-1988.

Con base en el Programa de Aliento y Crecimiento se estableció un nuevo convenio con el Fondo Monetario Internacional, en el que se consideraba el Programa de Ajuste de 18 meses y la solicitud de un préstamo del orden de los 12 mil millones de dólares; estableciendo, además la reducción del gasto público, el apoyo a la inversión extranjera, la venta o liquidación de paraestatales y los ajustes de precios y tarifas.

En 1987, la economía mexicana transitó por un breve repunte y se logró modificar el comportamiento de algunas variables económicas sobre todo de aquéllas vinculadas fuertemente con aspectos externos; se mejoró el superávit comercial, mejoró el precio del petróleo, se incrementaron las exportaciones no petroleras y se mantiene una reserva de divisas del orden de los 14 500 millones de dólares. Lo anterior permitió a los voceros gubernamentales afirmar que lo peor había pasado y el propio presidente de la República

reiteró en su V Informe que "no se modificará la estrategia económica en marcha", y se haría célebre la opinión del Secretario de Programación y Presupuesto, que afirmó en julio de 1987 que: "La recesión ha tocado fondo y se inicia una recuperación gradual". El discurso no es novedoso y recuerda el año de 1984, cuando debido al carácter cíclico de la economía mexicana, se logró una recuperación del PIB de 3.7 por ciento respecto a 1982 y se lograron tasas positivas en los sectores productivos. Pero nos recuerda también, que para el segundo semestre de 1985, estaba de nuevo presente una fuerte contracción de la economía, una severa distorsión de la estructura productiva y mayor deterioro de la sociedad que se prolonga hasta la fecha. La situación más espectacular se refiere al comportamiento de la balanza de pagos cuya evolución fue sobresaliente y los cambios ocurridos en el sector externo son significativos, así como el aumento del superávit comercial y la acumulación de las reservas internacionales. El aumento del superávit comercial se debió principalmente a la expansión de las exportaciones que subieron en un 39 por ciento sobre todo por la recuperación del precio del petróleo y el crecimiento de las exportaciones manufactureras estimuladas por el alza del tipo de cambio, la liberalización del comercio, exterior, debilidad de la demanda interna y la merma de los salarios reales.

Por otra parte, los indicadores del crecimiento industrial mostraron crecimiento positivo, en relación al de 1986, aunque este crecimiento dista mucho de ser homogéneo y suficiente y aun mantiene una tasa de 2.6 por ciento menor a la registrada en 1986. La formación bruta de capital disminuyó para enero-mayo de 1987, en relación al mismo periodo de 1986 en un 7.9 por ciento. El empleo en el sector industrial de 7.3 por ciento inferior a las horas-hombre trabajadas se redujeron 8.6 por ciento. La inflación se intensificó y alcanzó la tasa anual de 160 por ciento. El PIB fue del 1.4 por ciento. El saldo de la deuda externa del sector público era de 81 500 millones de dólares y el saldo de la deuda interna ascendió a 61.0 billones de pesos. La deuda externa total es de aproximadamente 106 000 millones de dólares. La participación estatal se reduce a sólo 13 ramas de las 28 en que participaba en 1982. La inversión extranjera acumulada es de aproximadamente 20 000 millones de dólares, el 65 por ciento proveniente de los Estados Unidos. El gasto en inversión disminuye un 11.7 por ciento global y el 2 por ciento de la industria acapara el 63 por ciento de las ventas internas y el 50 por ciento de las exportaciones manufactureras son realizadas por transnacionales.

El lunes 14 de diciembre de 1987, se dan a conocer nuevas medidas que se insertarían en un nuevo programa de ajuste: aumento a los precios y tarifas del sector público, incremento del tipo de cambio controlado y reducción de los aranceles. El día 15 de diciembre, se anunció el Pacto de Solidaridad Económica (PSE) como un compromiso de los sectores del poder político y económico para combatir la inflación a través de medidas específicas en las finanzas públicas, política comercial y cambiaria, política salarial, agrícola y monetaria. El punto de partida es nuevamente la reducción de la demanda reduciendo el déficit financiero y elevar el superávit primario, reducir el gasto programable, subsidios y transferencias y el gasto paraestatal. El salario se incrementa para luego congelarse y se fortalecen las restricciones crediticias. Reprimida la demanda se busca controlar la evolución de costos y márgenes de ganancia, se mantiene estable el tipo de cambio y el respaldo de un alto nivel de reservas en divisas. Se reducen las tasas de interés y se establece un limitado control de precios a 74 productos básicos acompañado de una recomendación de no aumentar los precios de los demás productos fuera de control gubernamental. Se espera así, lograr una tasa de inflación del 2 por ciento mensual a partir de mayo y anualizada de sólo 70-75 por ciento a diciembre de 1988. El supuesto de quienes crearon el Pacto era que controlada la inflación aun con contracción de la economía durante el primer semestre, a partir del segundo semestre se reactivará y el PIB de 1988 crecería un 2 por ciento. La segunda fase del pacto se dio a conocer el 28 de febrero en el que se compromete al aumento del 3 por ciento de los salarios en marzo, a no incrementar tarifas y precios del sector público, continuar reduciendo las tasas de interés, a no aumentar los precios bajo control y mantener estable el tipo de cambio.

Sin menospreciar el posible éxito de reducir la inflación considero que el problema fundamental es el crecimiento de la economía, el empleo y la distribución del ingreso y que en todo caso se parte del falso supuesto de exceso de demanda y de un periodo previo al pacto durante el cual se provocó por adelantado el efecto acumulativo de la inflación de 1988 permitiendo con ello matizar las cifras reales y transfiriendo a los grupos de poder económico grandes sumas de ganancia extraordinaria. A ello se puede agregar la capacidad productiva perdida, los graves desequilibrios internos, despidos masivos en empresas y sector público, desaparición de pequeñas y medianas empresas y la eliminación o venta de paraestatales que hacen prever

grandes dificultades para lograr crecimientos en la producción con una base tan deteriorada de la economía nacional. Es de dudar que con esta política antinflacionaria de corto plazo que no ataca los aspectos estructurales como el de la distribución del ingreso, determinación de precios y los pagos por servicio de la deuda, se apunte en realidad a una verdadera modificación de las condiciones económicas y sociales que la crisis ha impuesto.

La deuda que llegó para pagarse... Características y opciones

La deuda de los países latinoamericanos es, sin duda, uno de los graves obstáculos al crecimiento económico y factor de profundo desequilibrio externo que subordina y restringe la producción, distribución y aplicación de los excedentes de la región. Baste de nuevo recordar que la deuda externa total acumulada es de 409 815 millones de dólares de la que sólo por servicio se ha transferido al exterior durante el periodo 1982-1987 la suma de 150 000 millones de dólares sólo por pago de intereses de 1985-1987 se cubrieron más de 85 000 millones.

La deuda externa como proporción del producto interno bruto en los 15 mayores países endeudados del mundo, entre ellos México, alcanzó en 1987 el 48.3 por ciento y la proporción de deuda-exportación de bienes y servicios significó el 328.9 por ciento. Los países latinoamericanos más endeudados son Brasil, México, Argentina, Venezuela, Chile, Colombia y Perú, en este orden, la suma total de la deuda de estos países es de 361 000 millones de dólares. Para el caso de México su deuda externa total es de 105 000 millones de dólares. Los pagos de intereses representan el 6 por ciento del PIB y de 1983-1987 se ha pagado por servicio de la misma más de 100 000 millones.

La llamada "crisis de la deuda", que se profundizó en el periodo 1982-1988 aparece como uno de los mayores obstáculos para el ahorro y el crecimiento. La década de los ochenta es considerada una década perdida que ha sumido a América Latina en el estancamiento económico, la inflación y el desempleo. Es preocupante que la participación de la industria en la producción nacional disminuya y genere un proceso de desindustrialización y que los pocos países que han logrado incrementos en su crecimiento lo hayan hecho a costos

altos de inflación, desequilibrio comercial, transferencia de recursos y grandes sacrificios sociales.

América Latina y sus gobiernos han emprendido diversas acciones ante la crisis e imponen transformaciones en la que lamentablemente una creciente aceptación de reducir el papel del Estado, privilegiar las exportaciones sobre el mercado interno y efectuar profundos ajustes de producción en sus economías. Se intentaron programas de estabilización en Argentina, Brasil y Perú que ya en 1985 demostraron sus limitaciones. Bolivia y Chile aplican drásticas medidas de austeridad y son hoy, para el FMI, naciones modelos de disciplina monetaria y fiscal. México aplica medidas de ajuste y privilegia la apertura al exterior, se privatiza la economía y es cliente modelo de la banca internacional realizando repetidas negociaciones en forma unilateral, ganando en plazos pero posponiendo el problema fundamental.

La llamada crisis de la deuda no es, por tanto, la explicación y causa de la crisis. Es sin duda uno de los mayores obstáculos pero la explicación de ésta tiene, como ya lo he señalado, un trasfondo histórico que debe ser comprendido en sus causas más profundas e internas. Sin embargo, parte importante del conflicto es también externo: el carácter y función de intromisión en los asuntos internos del FMI y sus cartas de intención, las formas y mecanismos que imponen inaceptables pagos de la deuda externa, poco acceso de capital nuevo, bajo crecimiento del mercado mundial, disminución de precios a los productos básicos de exportación y proteccionismo creciente. Como lo expresó Gert Rosenthal, Secretario Ejecutivo de CEPAL. "La región no ha crecido. Ha ido hacia atrás. Llamamos a la década actual periodo perdido. A menos que cambien una serie de factores la década próxima tal vez no sea mejor". Y es que el problema de la deuda no es hoy sólo un problema económico y financiero con su secuela social, es sobre todo un problema político.

A mediados de los setenta y al inicio de los ochenta la banca comercial internacional poseía miles de millones de petrodólares para prestar que se convirtieron en importante fuente de préstamos de capital para los países latinoamericanos que reciben más inversión extranjera, asistencia técnica y préstamos en abundancia. Desde los años setenta y hasta 1981, las economías latinoamericanas crecieron constantemente y se supuso que la economía internacional se recuperaría y crecería en forma importante. No fue así. El costo resultó ser alto para los países de América Latina. El cambio hacia los

préstamos disminuyó el vencimiento de los mismos y la deuda, mayor dependencia en altas y cambiantes tasas de interés y un empeoramiento del comercio y las relaciones económicas internacionales. Esto sin contar que parte de la deuda tuvo destino dudoso y aplicación incorrecta. Ante las dificultades crecientes para pagar se garantizaron por instituciones multinacionales préstamos "puente" de emergencia y los bancos comerciales llevaron a cabo reprogramaciones que obligaron a la entrega de nuevos préstamos para financiar parte de los intereses vencidos. Los grandes bancos triunfaron durante la década y pierde América Latina. Hoy se llega a un punto en que se coincide que las negociaciones ya no funcionan y que debe haber cambios. Sin embargo, las moratorias unilaterales no han tenido éxito, tal fue el caso de México en 1982 y más recientemente, Brasil. Hoy se trata de emplear una variedad de mecanismos que varían desde la búsqueda de ampliación de plazas y periodos de gracia, trueques de deuda por acciones y, el más reciente, de emplear bonos con el respaldo de Estados Unidos.

El pago del servicio de la deuda es sin duda hoy insostenible tanto desde el punto de vista económico, como social y político. La diversidad de posibilidades ofrecidas para aliviar su carga está agotada; sea desde la perspectiva de aumentar los flujos financieros hacia la región o de capitalizarla enajenando los activos nacionales pasando éstas desde las propuestas del Grupo de los 77, el Plan Baker y Bradley y el establecimiento de una institución multilateral a la que los bancos transferirían la deuda a cambio de bonos. Ninguna de estas opciones han sido ampliamente aceptadas ni aplicadas con éxito. Las condiciones de renegociación han mejorado sin duda comparando las celebradas en 1982-1983 y las de 1984-1985, pero continúa siendo alto su costo y ello mantiene en su magnitud el problema sobre todo en lo referido a los intereses.

La estrategia de los bancos es, por su parte, muy evidente. Se trata de disminuir sus riesgos y para ello han adoptado una serie de acciones tales como el aumento de sus reservas para préstamos dudosos. En este sentido los bancos norteamericanos aumentaron este tipo de reservas en más de 21 mil millones de dólares en 1987. El acceso de América Latina a otras fuentes de financiamiento es limitado. Los flujos de inversión extranjera hacia la región se han reducido a la mitad.

Los organismos financieros multilaterales como el FMI, el Banco Mundial y el BID se asignan funciones que no deben ser aceptadas por

nuestros países. El FMI, se ha adjudicado el papel de querer dirigir nuestras economías y establecer las reglas y condiciones. Su insistencia en aplicar políticas de corte recesivo le ha ganado mayor descrédito y rechazo para suscribir acuerdos de estabilización ortodoxos y neoliberales y que hoy lo convierte en acreedor neto de los países de la región.

El Banco Mundial sólo ha servido cuando adopta su condicionalidad para préstamos de ajuste estructural a los mismos principios que orientan al FMI. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sometido a presiones ha sido incapaz de establecer o proponer una estrategia coherente frente a la crisis y el endeudamiento de América Latina. Se adelanta así el fracaso de la estrategia tradicional que hoy muchos reconocen. Cabe por lo tanto preguntarse si los países latinoamericanos seguirán estando dispuestos a someter sus economías a los vaivenes de la deuda externa y continuar dócilmente aceptando y firmando políticas y estrategias diseñadas e impulsadas por los centros del poder económico mundial.

En las condiciones actuales y en los últimos meses se expresan numerosas iniciativas y declaraciones que buscan una solución duradera y justa al problema de la deuda externa. Algunas, desde hace tiempo, han sido promovidas por los países no alineados, el Grupo de los 77, Acuerdos de Cartagena y sobre todo en diversas reuniones celebradas en y por América Latina: La Habana, Quito, Montevideo, Buenos Aires; Brasil y México. Destaca entre éstas la reunión del Grupo de los Ocho en México. Propuestas concretas se han expresado desde el mundo intelectual y científico y con cierta frecuencia por parlamentos o diputados y congresistas norteamericanos.

Cada vez más se escuchan voces que, ante las dificultades nacionales y de la región, piden soluciones más favorables, incluida la moratoria de pagos.

En las últimas semanas, en el XXII periodo de Sesiones de la CEPAL, celebrado en Brasil se plantearon medidas para pagar la deuda, se reconoció y se hizo la denuncia con mayor énfasis la situación de deterioro económico de la región. También en Brasil la Fundación del Tercer Mundo realizó el 5 de mayo de 1988, una reunión sobre la deuda, en la relatoría se hizo la recomendación de una moratoria por seis años. El Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM organizó, en 1986 y 1987, seminarios sobre la deuda en los que se plantearon medidas y opciones incluyendo la moratoria. En el mes de abril se celebró la reunión preparatoria del Grupo de los 24. Este

grupo plantea que el pago de la deuda debe adaptarse a la capacidad de pago de los deudores y evitar la recesión. El 23 de marzo concluyó la XXIX Asamblea del BID en Caracas, en la que se expresa que la deuda no debe condenar a Latinoamérica a la servidumbre. Camdessus, Director General del FMI, alertó que la deuda seguirá con nosotros más tiempo.

Sin embargo, los reclamos y propuestas sobre la deuda que exigen una solución equitativa no han tenido eco en el mundo de los bancos y seguramente no serán escuchados mientras los países de la región no se movilicen, realicen acciones conjuntas y establezcan nuevas formas de integración económica y cooperación, de apoyo recíproco y solidaridad que les permita capacidad real de negociación. Sobre esta base y tomando en cuenta las necesidades de los países deudores y su objetivo de crecimiento y desarrollo, serían el marco necesario de nuevas y diferentes negociaciones. Habría que tratar de adaptar el servicio de la deuda a las capacidades reales de pago de cada país, reducir los intereses y amortizaciones a un porcentaje no mayor del 2-3 por ciento del PIB o de su relación con los ingresos por concepto de exportaciones. La deuda es un problema político y así deberá ser considerada partiendo del supuesto de la soberanía nacional y tendrá que ser tratado en forma interrelacionada el problema de la deuda con el crecimiento, el comercio y el financiamiento para la inversión.

Es necesario poner fin al problema de la crisis y de la deuda. La región enfrenta problemas de gravedad históricos y estructurales, que datan de antes de la llamada crisis de la deuda y que ameritan respuestas y soluciones. El atraso estructural, desempleo y subempleo, pobreza, condiciones precarias de salud, vivienda, educación y cultura en que viven grandes sectores de la sociedad latinoamericana no pueden esperar más ni aceptar el destino de una década más de deterioro y dependencia.

Nuestro desafío es el de transformar la crisis en una oportunidad para establecer otra estrategia de desarrollo y transitar a corto y mediano plazo en la integración latinoamericana y el progreso de la región. Un paso importante y necesario es establecer un marco diferente en el tratamiento de la deuda y su posible pago sobre bases reales y equitativas que no vulneren ni obstaculicen un proyecto regional fincado en el crecimiento, fortalecimiento interno, distribución del ingreso, reestructuración productiva, independencia y soberanía nacional y regional. Proponemos entonces, y en el caso de la deuda, lo siguiente:

1. Reprogramar la deuda a su valor del mercado.
2. Disminuir el monto de la tasa de interés a un máximo de 4-5 por ciento anual.
3. Suspender el pago de intereses y amortización de la deuda por un plazo de cinco años.
4. Interrelacionar deuda con comercio y financiamiento.
5. Sólo pagar por servicio de la deuda un máximo del 2-3 por ciento del PIB o en su caso dedicar un máximo del 15-20 por ciento del total de las exportaciones.